



¿A cambio de?

¿Merecen los trabajadores del sector público una mejor pensión? En principio, sí. Qué bueno que todos los partidos políticos estén de acuerdo con la propuesta que AMLO hará mañana, 5 de febrero, para incrementarlas. Pero la clave está en los detalles.

Muchos trabajadores del gobierno están mal pagados y casi todos tendrán una pobre pensión. Pero también hay burocracias gubernamentales muy bien remuneradas y con algunas de las mejores pensiones del país, y no por eso desempeñan bien sus funciones. El extremo era Luz y Fuerza del Centro. Se pensionaban ridículamente jóvenes con un monto mensual superior a su último sueldo. A pesar de esas condiciones de privilegio no había vocación de servicio, sino de abuso.

El elector parece no castigar la mala calidad de los servicios públicos mientras les den dinero. Este ha sido el modelo político del gobierno actual: transferencias en efectivo, pero servicios públicos cada vez peores. Esta ruta ha llevado al creciente debilitamiento del Estado.

El mejoramiento en las pensiones debe darse a cambio de reglas laborales que lleven a los burócratas a preocuparse, y ocuparse, por hacer bien su trabajo. Debe quedar claro que quien no cumpla con su trabajo podrá ser despedido. De lo contrario, entre mejor sea la jubilación, mayor será el incentivo de estar "calentando la silla" para llegar a la edad de retiro.

Incluso si se logra el acuerdo de mejorar las pensiones a cambio de reglas que incrementen la calidad de los servicios públicos, viene el problema de siempre. ¿Cómo se van a financiar? No sería justo subir las pensiones a cambio de aún menos medicinas en los hospitales públicos. Si la salida fuera subir los impuestos para financiarlas, hay temas más importantes que se deben resolver antes, desde el sistema de salud hasta la seguridad pública.

Es falso que se puede financiar una reforma en las pensiones desapareciendo los órganos autónomos. Cuesta mucho

más Mexicana de Aviación y sus aviones que vuelan con un pasajero que la Cofece, con un presupuesto anual de 6879 millones de pesos.

Desaparecer los órganos autónomos y debilitar al INE, y a la Suprema Corte es centralizar todo el poder en la Presidencia. Ésta contaría los votos, decidiría qué información hacer pública, a quién permitir comprar a un competidor, asignar el espectro radioeléctrico, decidir qué generador eléctrico se conecta primero a la red... No sólo esto sería terminar con la democracia y la separación de poderes, sino que ya hemos visto lo que cuestan las decisiones discrecionales, como cancelar un aeropuerto muy avanzado en su construcción y ya financiado, para hacer uno que no quiere usar el consumidor.

La buena noticia es que hay dinero mal gastado en el sector público que se podría usar para incrementar las pensiones y mejorar los servicios públicos. El caso extremo de hoyo negro es Pemex. Las actividades industriales de nuestra empresa estatal, con datos al tercer trimestre del 2023, han perdido 874 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, es decir 796 años del presupuesto del INAI.

Pemex pierde mucho más que antes porque entre más gasolina produce, más grande es el hoyo. No es casualidad que a pesar de producir algo más de gasolina que al arranque del sexenio, acá no es más barata que la de Estados Unidos, como prometió AMLO en su campaña. En enero fue 66 por ciento más cara.

¿Qué preferirá el elector? ¿Cargar su auto con gasolina importada, al mismo precio que le cuesta hoy, pero cuya producción no implicó desperdiciar nuestros impuestos, a cambio de tener un mejor servicio de salud con médicos que saben que tendrán una buena pensión? ¿O realmente desea seguir financiando las ineficiencias de Pemex, emocionado por la retórica nacionalista, pero tener que pagar más impuestos o sufrir servicios públicos más malos para financiar una reforma pensionaria? Dejemos los cuentos y pongámonos a sumar y restar.

